

CLAUDIO URIARTE

ALMIRANTE CERO

Biografía
no autorizada de
Emilio Eduardo Massera



EDICIÓN DEFINITIVA



Claudio Uriarte

Almirante Cero

Biografía no autorizada
de Emilio Eduardo Massera



I

ARGENTINA PRERREVOLUCIONARIA
(1972-1975)

La Argentina todavía vivía las vísperas de la revolución. El imaginario revolucionario estaba agotado o en vías de agotarse en el mundo, después de las fulguraciones finales de la revuelta estudiantil de mayo de 1968 en París; la agonía del ejército norteamericano en Vietnam, que a la izquierda le gustaba retratar como el fin del imperialismo estadounidense, constituía en realidad el desenlace largamente demorado de un capítulo postrero en la lucha por la descolonización, y en América Latina coexistía un mosaico de diversos regímenes que comprendían la extrema izquierda ideológica de Fidel Castro en Cuba, el populismo autoritario izquierdizante del Partido Revolucionario Institucional en México, el antiimperialismo nacionalista ambiguo del general Omar Torrijos en Panamá, las dictaduras unipersonales y semifeudales como la de Anastasio Somoza en Nicaragua y países vecinos, la vía pacífica y democrática hacia el socialismo de Salvador Allende en Chile y la dictadura militar tecnocrático-desarrollista de Brasil. Solamente una fantasmagoría ideológica de la época permitía que esta crisis de representación múltiple se viviera como prolegómeno de una revolución continental; constituía, en realidad, la trabajosa adaptación y transición a un nuevo orden latinoamericano y mundial, los terremotos políticos originados por unas placas subterráneas sociales y políticas insuficientemente fijadas.

La democracia parlamentaria no se consideraba una manera viable ni deseable de actividad histórica y política. Los países latinoamericanos estaban en un proceso de aserción de sus individualidades nacionales frente al gran gigante del Norte, y quienes preconizaban la democracia aparecían como portavoces de una máscara de domina-

ción imperial. La Argentina, en este contexto, vivía ideológicamente tanto en las vísperas de la presumible Revolución que prácticamente no existía proyecto político que no legitimara su derecho a la existencia mediante la apelación ritualística y ligeramente fetichista a la palabra «Revolución»: la dictadura militar en retroceso que gobernaba Argentina en 1972 era el tercer y último capítulo de un golpe militar permanente iniciado en 1966 bajo el rótulo de «Revolución Argentina»; el grupo guerrillero izquierdista en ascenso se llamaba «Ejército Revolucionario del Pueblo»; el populismo nacionalista del Partido Justicialista (peronista), y su derivación de izquierda armada, los Montoneros, prometían al unísono la «Revolución Nacional», y una proclama de la escasamente radical Unión Cívica Radical, un partido de clase media que había vivido sus últimos cuarenta años del temor de su clientela política a la clase obrera, había dicho hacía poco que «la Revolución tendrá lugar en la Argentina con las Fuerzas Armadas, sin las Fuerzas Armadas o contra las Fuerzas Armadas». Se mejante coincidencia declarativa denotaba dos cosas: 1) que, por lo menos en las palabras, se sintomatizaba la definición de Lenin de una situación prerrevolucionaria, en el sentido de una situación donde la preservación del estado de cosas se vuelve insoportable para todos los sectores, y 2) que el término «Revolución» constituía una definición algebraica, vagamente fundado en referentes históricos internacionales tales como las revoluciones de Rusia, China y Cuba y la descolonización de Asia y África; no obstante, en la práctica implicaba descomposiciones distintas. La diferencia no consistía en el tipo de Revolución que se prometía impulsar (la mayoría de los portavoces se refería al «socialismo» o a la «justicia social»), sino en la actividad política concreta de cada sector y en la dinámica y naturaleza de las fuerzas sociales que se movilizaban bajo su bandera.

Uno

La Argentina vivía una crisis de representación y de erosión de la legitimidad de su poder político. Históricamente, esta situación era escasamente nueva: la ley Sáenz Peña de sufragio universal de 1912 había excluido de los beneficios del voto a los extranjeros, por ese entonces el grueso de la clase obrera de las ciudades, y a partir del golpe militar de 1930 las clases dominantes se acostumbraron a resolver sus problemas internos mediante la intervención intermitente del Ejército. La victoria del coronel Juan Domingo Perón en las elecciones de 1946 representó la primera muestra de sufragio auténticamente universal y democrático, pero la instauración de la democracia parlamentaria en la Argentina vino acompañada de tres componentes fuertemente desestabilizantes: la movilización de masas que fue necesaria para sacar al coronel de su arresto y permitir su candidatura electoral, el encuadramiento de la mayoría de los trabajadores en sindicatos fuertemente asociados al Estado y al proyecto peronista, y el hecho de que la estabilidad y popularidad del modelo se basaban en generosas redistribuciones de ingresos bajo la forma de subsidios estatales, industrialismo keynesiano y aumentos constantes de salarios. Alcanzó con que se agotaran las extraordinarias reservas de posguerra, resultantes de la exportación sin precedentes de productos agrarios, para que ese modelo políticamente cerrado de alianza política y sindical, que sus enemigos describían como corporativismo fascista, hiciera crisis: el peronismo era la suma de una democracia parlamentaria y un desmesurado poder sindical. Un golpe militar desalojó al general Perón del poder en 1955; irónicamente, la operación se autodenominó «Revolución Libertadora»: la oposición a Perón en 1946 –una

alianza de conservadores, radicales, socialistas y comunistas espoleada por el extravagante embajador norteamericano Spruille Braden—se había denominado «Unión Democrática». La libertad y la democracia en la Argentina siempre fueron tales o no según cuáles fueran los sectores sociales que abarcaran.

La necesidad histórica del golpe de 1955 es retrospectivamente dudosa: la aproximación al capital extranjero, determinada por el colapso del modelo de sustitución de importaciones, sin duda requería un aumento de la coerción y la violencia social, pero no está probado que el apoyo electoral a Perón hubiera seguido siendo el mismo en las elecciones que estaban programadas para 1956, ni que el deterioro relativo de las condiciones de vida colocara a la Argentina en las vísperas de un movimiento revolucionario que pusiera en juego la totalidad del sistema. En lugar de ese recambio electoral, las Fuerzas Armadas, con respaldo político de los partidos de clase media, impusieron un modelo de estabilidad que era el reverso exacto del establecido por Perón: si éste fundaba la quietud en integrar a la clase obrera en forma orgánica e institucional dentro de su modelo de sociedad, partido y Estado, el golpe de 1955 lo hizo sobre la base de excluir sistemáticamente al peronismo de todo horizonte político. Tal situación, que comenzó con la inhabilitación y desarticulación de las instituciones y frentes fundados por los diez años de Perón, terminó en extremos casi graciosos, como la prohibición de nombrar a Perón (burlada por una revista opositora que se llamó a sí misma *Pero...*) y la alusión al presidente depuesto por parte del diario conservador *La Prensa* bajo el pintoresco eufemismo de «tirano prófugo». Los procedimientos represivos de la Revolución Libertadora, que reprodujeron —aumentada— la tortura policial vigente en las décadas del 30 al 40 y atenuada bajo el peronismo, y que instituyeron el fusilamiento ilegal de civiles y militares en junio de 1956, se volverían relativamente inocuos en relación con lo que ocurriría décadas más tarde. Sin embargo, y en materia de censura informativa y cultural, esos métodos eran a la libertad y la democracia como los diarios alemanes y soviéticos en tiempos de Hitler y Stalin. Consideraban posible que la prohibición borrara el recuerdo si era administrada con dosis homeopáticas de violencia social. Apuntaban, en realidad, contra las expectativas obreras de movilidad social, y creían que para eso era suficiente que los obreros se olvidaran de Perón. Su provincianismo ideológico sola-

mente era comparable con la estrechez de perspectivas de la burguesía argentina, una clase fundada en el aprovechamiento de la extraordinaria renta agraria y en su orbitación comercial del Imperio Británico. Si hablaban de democracia y de libertad no era con la mira fija en los grandes experimentos británico y norteamericano. Se referían a la utopía democrática de clase media anterior a la llegada del peronismo al poder, cuando las grandes masas del interior del país todavía no se habían incorporado a la política y recién empezaban a incorporarse a las nuevas industrias urbanas. Los jefes de 1955 confundían su programa con la ideología de la base social que los apoyaba, y sólo prometían elecciones para cuando el pueblo estuviera maduro para votar lo que ellos quisieran. La Argentina se convirtió en un país racista sin negros, con un «apartheid» político permanente fundado en la exclusión de los «cabecitas negras» de provincia.

El '55 constituyó un imperativo más ideológico que social para la clase dominante argentina. La incapacidad del Estado peronista para administrar la austeridad fue rápidamente homologada con una simbología cultural negativa, que contrastaba la supuesta «civilización» del experimento golpista con la supuesta «barbarie» de la década peronista; los valores «europeos» del utopismo «libertador» con el resentimiento cultural de la «Argentina profunda»; la ética del trabajo con las dádivas de la Argentina de Jauja. El peronismo fue culturalmente confinado al imaginario de la pereza, el desorden y la promiscuidad de las clases bajas, y a lo que ensayistas como H. A. Murena y Ezequiel Martínez Estrada describían como «el pecado original de América»: el apareamiento del conquistador con la india y el nacimiento de una generación de mestizaje condenada por la violencia y el odio. Se generalizaron las denuncias sobre lujo, corrupción y decadencia de Perón y su *entourage*; se exhibieron los vestidos y las joyas de la difunta ex jefa populista Eva Perón, en la esperanza de que el pueblo reaccionara indignado como el vulgo frente a los palacios de la realeza de Francia, y se aceptó un estricto autoritarismo militar como forma de disciplinar y civilizar al pueblo. Terminaron construyendo una dicotomía que luego se describiría como «el país oficial y el país real», porque la clase obrera, lejos de abandonar a Perón y olvidarse del peronismo, idealizó a Perón aún más que cuando se encontraba en el poder. El movimiento peronista en su conjunto, lejos de refinarse y civilizarse, terminó adoptando rasgos de la misma ideo-

logía que los militares iluministas del '55 denunciaban, esa mixtura de nacionalismo inconsecuente, populismo cultural y apelación general al instinto de masas. Significativamente, los peronistas denominaron a sus antagonistas como «gorilas», mientras éstos denominaban a la masa de seguidores del tirano prófugo como «cabecitas negras». Animales en el poder y una muchedumbre de seres inferiores en el llano: no existía un imaginario común de ciudadano argentino.

De alquimia fallida y barroco inútil podría definirse el intento perpetuo de la clase político-militar dirigente de construir un sistema a partir de estos datos, o por lo menos de sostener el orden. Desde 1955, se practicó cada variante posible e imposible de gobierno sin Perón: dictadura militar directa (1955-1958), gobierno civil votado y elegido con respaldo de Perón (1958-1962), gobierno civil no electo y basado en fracciones militares (1962), nuevamente gobierno civil votado y elegido, pero sin respaldo peronista y con completa exclusión del peronismo (1963-1966) y nuevamente dictadura militar directa (desde 1966). Cada uno de estos ensayos parece el entreacto de una ópera sobre la que nunca se levanta el telón, una nueva forma del error, y también una tácita farsa a dos puntas: los generales y almirantes y sus políticos adeptos fallaban en el intento de desalojar al peronismo del espectro de preferencias políticas de los votantes. Al mismo tiempo, el peronismo se fraccionaba en distintos intentos de acomodación, y su líder exiliado en España rechazaba cualquier estrategia de poder que implicara la confrontación abierta con las Fuerzas Armadas a las que había pertenecido en el pasado. El intento de preservar el orden sin el peronismo, y el intento peronista de volver al poder sin perturbar el orden burgués terminaban constituyendo, de este modo, la paradójica fórmula del desorden, la inestabilidad y la crisis política permanente: no había gobierno que pudiera sostenerse sin el apoyo de Perón, pero el golpe de 1955 inauguraba un ilevantable veto militar sobre cualquier experimento que recreara la participación de Perón en el escenario político. La extrema rigidez y el conservadurismo de las Fuerzas Armadas, junto con la extrema cautela y prudencia del jefe del movimiento peronista, terminaban, de este modo, forzando un desenlace paradójico para un drama político donde todos eran tan conservadores: la Revolución. Las clases dominantes y las clases dirigentes argentinas terminaron aproximando el fantasma revolucionario de tan conservadoras que eran; el inicial tratamiento de un vul-

gar jefe populista exiliado en Madrid como si hubiera sido Lenin en la estación de Finlandia terminó provocando que la revolución acabara recreándose insidiosamente en la ideología social como único método para que Perón volviera al poder.

Una comparación interesante puede hacerse entre los doce años que mediaron entre las revoluciones rusas de 1905 y 1917 y los diecisiete años entre el golpe argentino de 1955 y el regreso de Perón al país. Los paralelos resultan evidentes: la incapacidad de las clases dirigentes para prefigurar un desenlace democrático, la incapacidad de las clases dominadas para subvertir el poder de las clases dominantes, las modificaciones moleculares de la sociedad y de la conciencia social. Sin embargo, debajo de la analogía superficial, se destacan las diferencias: el zarismo y el complejo entramado de relaciones feudales, semif feudales y burguesas de la sociedad rusa volvían efectivamente imposible cualquier avance; el caso argentino, en cambio, constituía una sociedad burguesa relativamente moderna cuya democratización no hubiera implicado la muerte de ninguna clase social. La república burguesa en Rusia implicaba destruir la monarquía y la clase de los grandes terratenientes; autorizar la vigencia de la Constitución Nacional en la Argentina representaba una operación que no tenía otro límite que la ideología y los prejuicios de sus clases dominantes. El peronismo en el poder no representaba otra cosa que la redistribución de los ingresos, y eso hubiera significado la crisis del peronismo, pero no la crisis del sistema. La izquierda fue minoritaria en la Argentina desde la década del 30, y si el peronismo en el gobierno tuvo algún rol al respecto fue el de hacerla todavía más enclenque. Adquirió envergadura en la década del 60, con la continuada proscripción de Perón, con la represión oficial y con un acontecimiento que va a constituirse en espejo y curiosa reedición argentina del levantamiento de mayo de 1968 en París: la insurrección de la ciudad de Córdoba en mayo de 1969, popularmente conocida como «Cordobazo». «Córdoba estaba enferma de orden», diría el general Alejandro Agustín Lanusse, último gobernante militar del período, en sus *Memorias*. Es posible concluir que todo el país estaba enfermo de un orden que no había elegido; solamente hallaba equilibrio en las fórmulas abstractas que se invocaban para justificarlo, pero tenía crecientes dificultades para sobrevivir como tal.

El Estado, por más armazón autoritaria que presentara en determinados períodos, era una organización extremadamente débil. El or-

den político desde 1955 era el puro resultado de un golpe de mano, y la estructuración de las Fuerzas Armadas bajo el modo de veto militar y último garante del orden despojaba todo experimento político de cualquier pretensión de legitimidad. La posibilidad de un gobierno civil se decidía en la disputa interna de las Fuerzas Armadas, y la falta de legitimidad de esos gobiernos convertía su derrocamiento en una pura operación de suma y resta de cuadros castrenses. Sin embargo, y como contraparte de esta militarización de la vida política, las Fuerzas Armadas padecían la politización de su vida institucional: las contradicciones de la sociedad y de sus clases dominantes tendían a reproducirse y estallar dentro de la estructura militar en la forma de fracciones antagónicas, llegando al punto de provocar enfrentamientos armados. El golpe de mano, figura fundacional del golpe de 1955, se convirtió en el último recurso de cada operación. Tomar el poder en la Argentina era extremadamente fácil, generalmente bastaba con el convencimiento de suficientes uniformados. «Golpear la puerta de los cuarteles» se volvió la expresión de moda para políticos civiles incapaces de consumir desde el llano la pretensión de imponer sus programas. Hasta un sector del sindicalismo peronista pactó con el teniente general Juan Carlos Onganía para imponer su propia marca de «peronismo sin Perón». Cada figura política debía buscar referentes en el cielo militar.

El Estado, en realidad, era el estado de proscripción, y cualquier ataque contra ella se volvía un ataque contra el Estado. Había, precisamente por eso, cierta superfluidad de los cambios (golpe militar permanente), contrastada con una rigidez mortal: atravesar cierta barrera implicaba la muerte de todo.

* * *

La inercia y la agitación frenética y vacía suelen ser los sucedáneos para la propia falta de roles simétricamente complementarios de que disponen los Estados carentes de toda misión histórica. La Argentina sobre la que estalló el Cordobazo tenía un «país oficial» ocupado en planificar tecnocráticamente su propia prolongación estatal por décadas y un «país real» donde habían ocurrido modificaciones profundas desde el golpe de 1955: una nueva oleada de industrialización con capitales extranjeros había originado una nueva generación

de clase obrera sin vivencia directa del peronismo, una nueva clase media excepcionalmente ilustrada y crítica que descubría el marxismo y el psicoanálisis y admiraba los films de Ingmar Bergman y las experimentaciones de vanguardia del Instituto Di Tella. Asimismo, la Argentina era recorrida por nuevos vientos ideológicos que resignificaban el pasado: la Revolución Cubana, el proceso de descolonización mundial y la guerra de Vietnam implicaban una revalorización del nacionalismo, y la antipatía tradicional argentina hacia Estados Unidos hacía sistema con las corrientes de la época bajo la forma de oposición hacia el «imperialismo norteamericano». Tampoco era idéntica la correlación de fuerzas sociales de 1955: la clase media ya no ocupaba el lugar de privilegio que había tenido antes de los gobiernos peronistas, y era menos proclive a sumar apoyo a la coalición militar-burguesa contra el peronismo. Un sector de clase media baja merodearía entonces el fascismo y el fundamentalismo católico, menos en función de sus valores intrínsecos que como rechazo a los valores de la generación anterior.

El Cordobazo duró doce días, careció de prolongación nacional, obtuvo sólo ecos aislados en algunas provincias, y no se cristalizó en ninguna organización de masas. Su consecuencia principal fue una suerte de efecto ideológico a dos bandas: corporizó abruptamente en la Argentina el fantasma revolucionario que recorría el mundo, instaló la figura de la insurrección como objetivo y método en los activistas más comprometidos de la clase obrera y del estudiantado; además, instaló el espectro del derrocamiento total en la estructura militar, acostumbrada a devanear entre sus principios, sus vagas aspiraciones y las combinatorias diversas que podían hacer con y contra el «tirano prófugo», y la figura de Perón retrocedió como principal enemigo militar; ambas razones forzaron un replanteo. Una sociedad civil y unas Fuerzas Armadas acostumbradas a imaginar las alternativas como peronismo y antiperonismo, como proscripción y voto libre, súbitamente descubrieron una tercera vía, la palanca insurreccional que podía servir para quebrar con un hecho militar de masas el veto militar de elites que se había impuesto en 1955, y que también podía arrastrar al peronismo. Podía convertirse, de instrumento, en objetivo. Las consecuencias de este tercer programa no explícito llegaron rápido: las fuerzas armadas iniciaron sucesivos reacomodamientos y purgas internas con vistas a la autorización del peronismo dentro del espectro

político, y los grupos de la izquierda más radical se plantearon el lanzamiento de organizaciones político-militares que disputarían el poder armado con las armas. El planteo de democratización realizado desde las Fuerzas Armadas coincidía con el momento de mayor militarización civil conocida hasta entonces.

La totalidad social estaba impregnada de una ideología militarista. Años de protagonismo político de las Fuerzas Armadas habían determinado que tanto civiles como militares terminaran creyendo en el reduccionismo militar fetichista de sostener que «el poder nace de la boca del fusil», como si el fusil fuera independiente de la mano de quien lo sostiene y como si la mano no fuera a su vez atravesada por complejas relaciones de fuerzas sociales, políticas e ideológicas. Los militares no habían descubierto la democracia, sino que veían en el peronismo una póliza de seguros para poder seguir detentando las armas que, según creían ellos, constituían el último depositario del poder. Los más lúcidos entre ellos creían que sería bueno un tiempo de prescindencia y profesionalismo donde se cerraran las heridas resultantes de la participación directa en la escena política: la politización nacionalista y hasta izquierdista de escalones inferiores del cuerpo de oficiales no constituía una preocupación menor. Los grupos más radicalizados de la izquierda, a su vez, veían en las elecciones una farsa, un autoenmascaramiento del régimen militar, una postergación de la lucha definitiva y una operación del régimen para descomprimir tensiones sociales. La primera acción significativa de la organización Montoneros fue el asesinato en 1970 del general Pedro Eugenio Aramburu, el segundo presidente de la Revolución Libertadora, a quien se atribuía un intento de conciliación con Perón. Cada polo del antagonismo ideológico se veía a sí mismo como metáfora militar de un enfrentamiento social, y cada uno de ellos creía sólo en las armas como medio para dirimir ese enfrentamiento.

Los militares se habían autoidentificado con el Estado y con la clase dominante. Los izquierdistas se veían a sí mismos como «vanguardia» de unas masas movilizadas pero sin dirección. La guerrilla ganó simpatías como respuesta popular contra el poder militar, aunque sólo conquistó adhesiones decididas en la clase media urbana y en los estudiantes, intelectuales y profesionales. La paradoja mayor de la época es que el Cordobazo no había sido el inicio de la conver-

gencia entre los trabajadores manuales y la clase media urbana en el rechazo contra el régimen, sino que había agotado en su despliegue toda posibilidad de una dinámica común. Aunque había inaugurado la hegemonía ideológica de la Revolución, la clase obrera manifestaría la mayor parte de sus reclamos desde ese momento en la forma tradicional de huelgas y manifestaciones sindicales; mientras, la clase media politizada lo hacía en diversas gradaciones, desde el partido de izquierda hasta el terrorismo urbano. El Ejército Revolucionario del Pueblo hizo una práctica usual del robo de camiones de leche y su reparto entre los pobladores de las villas miseria. El procedimiento aproximaba simpatías pero distanciaba en la práctica. Los trabajadores estaban de un lado y los guerrilleros del otro.

Sin embargo, la ideología militarista impregnó con tanta fuerza el tejido social y político que hasta el propio Perón tiñó todas sus declaraciones desde el exilio de un fuerte tono insurreccional, y autorizó la constitución de «formaciones especiales» militares dentro del justicialismo para librar la lucha a muerte contra el régimen. Seguramente, el apoyo de Perón a la derivación revolucionaria de la lucha por la democracia política estaba motivado por su intención de chantajear al Ejército con la figura de la Revolución, pero no debe descartarse su necesidad de implicarse y controlar acontecimientos políticos que él no había previsto. Tenía que vérselas con un fenómeno revolucionario en ciernes, y tenía que ponerse a su cabeza si no quería quedar desbordado por él.

Una síntesis del sistema de creencias de la época puede representarse en la dicotomía entre guerrilla y pueblo por un lado con Ejército de ocupación por otro. El fusilamiento ilegal y sin juicio previo de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros en la base aeronaval Almirante Zar en Trelew, en 1972, despertó la indignación y el reclamo de la sociedad civil y de los partidos políticos, y la mayoría de la opinión común del país estaba mucho más pronta a simpatizar emocionalmente con los guerrilleros que a hacerlo con los militares gobernantes. Para colmo la guerrilla se financiaba con secuestros de los empresarios multinacionales, en ese momento la encarnación del mal en la creencia popular.

* * *

El '72 termina de formalizar el reflujo de la Revolución Libertadora, cuando las Fuerzas Armadas deciden replegarse del escenario político y permitir la vuelta del peronismo al poder. La Argentina no era prerrevolucionaria porque estuvieran constituyéndose nuevos órganos de poder político popular alternativos a los del Estado, ni porque sus trabajadores estuvieran marchando en una dinámica homogénea de ascenso de sus luchas sociales, ni siquiera porque estuviera formándose un gran partido izquierdista de masas. El clima prerrevolucionario era una mezcla de hegemonía ideológica, efecto de lectura política y decorado escénico. La hegemonía ideológica era un producto de época, el efecto de lectura política se desprendía de la extrema tensión entre el aparato militar dominante, y el decorado escénico era el resultado cotidiano visible de estos dos elementos: marchas y manifestaciones a diario, copamientos guerrilleros de radios y canales de televisión, incesantes planes de lucha sindicales, extrema difusión de la literatura de izquierda y creciente florecer de las banderas rojas.

Con este panorama en cierne, el general Lanusse había puesto en marcha en 1971 el proceso de «institucionalización», y había ordenado la constitución de una comisión interarmas para elaborar el plan político de la transición. En 1971 el delegado de la Marina a esta comisión fue el vicealmirante Luis Pereyra Murray. En 1972, el contralmirante Emilio Eduardo Massera.